

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES
DEMANDADOS	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-020-2019-00056-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Reliquidación de pensión de vejez – Régimen de transición – Decreto 758 de 1990
DECISIÓN	Confirma

*Medellín, quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)*

*Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 031**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la señora **CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES** contra la sentencia que profirió el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 19 de abril de 2022.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES alcanzó a reunir a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994) un total de 763 semanas, que a su juicio le permiten ser beneficiaria del régimen de transición pensional del artículo 36 de la ley de seguridad social.

Estima que el beneficio de la transición le permite acceder a la pensión de vejez bajo los presupuestos del Decreto 758 de 1990, y no obtener el reconocimiento pensional conforme a la Ley 797 de 2003 como COLPENSIONES lo hizo a través de la Resolución SUB 216393 del 4 de octubre de 2017, en la que le otorgó el derecho a partir del 5 de abril de 2017, fecha del cumplimiento de los 57 años de edad.

Hizo mención al Acto Legislativo 01 de 2005 como una disposición constitucional que protege los derechos adquiridos, e indicó que el 12 de julio de 2018 elevó solicitud de nuevo estudio ante COLPENSIONES, a fin de que accediera a reconocerle el retroactivo pensional desde el 5 de abril de 2015 cuando cumplió los 55 años de edad y que le aplicara una tasa de reemplazo o monto del 90% por tener acreditadas más de 1250 semanas cotizadas en toda su vida laboral, conforme al artículo 20 del decreto 758 de 1990.

## **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que, se declare que la señora CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES tiene una expectativa legítima o derecho adquirido al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que le

da derecho a que su pensión de vejez se liquide y reconozca con fundamento en el Decreto 758 de 1990, solicitando se condene a COLPENSIONES a reliquidar su prestación, reconociéndola retroactivamente desde el 5 de abril de 2015 cuando arribó a los 55 años de edad, con la aplicación de una tasa de reemplazo del 90% sobre el IBL, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas objeto de condena y las costas procesales del juicio.

#### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo la accionada a dar respuesta a la misma por intermedio de apoderada judicial (PDF 6 del expediente digital).

A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; aceptó el status de pensionada de la actora, el número de semanas cotizadas, su edad y las condiciones legales en que se reconoció el derecho y; formuló las excepciones perentorias de *“FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER Y PAGAR LOS INTERESES DE MORA, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, BUENA FE, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS y DECLARATORIA DE OTRAS EXCEPCIONES”*.

#### **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública celebrada el 19 de abril de 2022, la Juez de conocimiento en primera instancia absolvió a COLPENSIONES de las pretensiones incoadas en su contra por la señora CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES, declarando probada la excepción de falta de causa para pedir y condenó en costas a la parte demandante, en favor de COLPENSIONES.

Argumentó su decisión indicando que, si bien la asegurada fue beneficiaria del régimen de transición pensional por tiempo de servicio, al acreditar al 1º de

abril de 1994 más de 750 semanas cotizadas, habiéndosele incluso extendido el beneficio de la transición hasta el 31 de diciembre de 2014 al reunir la densidad exigida por la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005, no es posible que su pensión pueda liquidarse con una tasa de reemplazo propia del Decreto 758 de 1990 y que la prestación se pague desde la edad de 55 años, toda vez que era necesario que hubiere cumplido tanto el requisito de la edad como el de semanas cotizadas antes del 31 de diciembre de 2014, lo cual no ocurrió ya que configuró la edad en el año 2015, es decir, que el cumplimiento de la edad desbordó el límite constitucional establecido.

Hizo hincapié en el sentido de que el régimen de transición pensional no constituye un derecho adquirido, sino una herramienta protectora de expectativas legítimas.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.**

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante, quien solicitó la revocatoria integral de la providencia. Lo sustentó indicando que la señora CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES es beneficiaria del régimen de transición pensional por contar con más de 750 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994 conforme lo establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Insistió en que el régimen de transición pensional es un derecho adquirido y, al efecto citó sentencias de la Corte Constitucional C-789 de 2002, C-754 de 2004, T-534 de 2001, T-235 de 2002, T-169 de 2003 y T-818 de 2007, las cuales apoyan la tesis del régimen de transición pensional como un derecho adquirido.

Destacó de la jurisprudencia citada el principio de proporcionalidad, como el valor jurídico que inspira la protección del régimen de transición pensional haciendo lectura textual de algunas de las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002, en cuanto no resultaría ajustado a derecho que, quienes hayan cumplido con más del 75% de las cotizaciones a la

entrada en vigencia del sistema pensional, se vean privados de su expectativa legítima. De la misma forma citó la sentencia C-754 de 2004.

Concluyó afirmando que, conforme a la citada jurisprudencia, una vez establecido un régimen de transición pensional, quienes reúnen los requisitos allí establecidos consolidan una situación jurídica concreta que no se puede menoscabar. De manera particular y especial citó la sentencia T-818 de 2007, a efectos de insistir en que esta sentencia estableció que las personas que, al menos cumplieren uno de los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición tienen un auténtico derecho adquirido.

Añadió que la sentencia confunde el derecho adquirido al régimen de transición con el derecho adquirido a la pensión de vejez, y que la A quo pierde de vista que la demanda no está solicitando un derecho adquirido sobre la pensión, sino un derecho adquirido sobre el régimen de transición.

Continuó indicando que el derecho adquirido al régimen de transición no puede ser entendido como una mera expectativa, ya que aquel tiene por finalidad proteger expectativas legítimas y que, una vez establecido, no se puede desconocer.

Solicitó la aplicación de los principios del derecho que señalan que, allí donde existe la misma razón, debe existir la misma justificación, refiriendo que si incluso personas que fueron al RAIS recuperaron ese derecho, no existe razón para que no se le respete a la actora, y el principio consistente en que nadie está obligado a lo imposible, a propósito de que resulta ilógico que a la demandante se le exigiera cumplir la edad de 55 años antes del 31 de diciembre de 2014, ya que es un imposible fáctico.

Elevó críticas al Acto Legislativo 01 de 2005, argumentando que el mismo no tuvo en cuenta a las personas beneficiarias del régimen de transición que no alcanzaron a cumplir la edad mínima en el límite del año 2014, a las cuales dejó en desprotección.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En la debida oportunidad procesal, el apoderado judicial de COLPENSIONES allegó alegatos de conclusión, a través de los cuales solicitó se confirme la decisión de primera instancia al sustentarse en las premisas jurídicas aplicables al caso.

### **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de vejez – Régimen de transición-**

El objeto central de esta Litis, consiste en determinar si a la demandante CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES le asiste o no derecho, a que se le reliquide la pensión de vejez, en aplicación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758 de 1990, y si en consecuencia, hay lugar a ordenar el pago del retroactivo pensional causado desde el 5 de abril de 2015 cuando cumplió los 55 años de edad, con la aplicación de un monto del 90% sobre el IBL, los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las condenas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a la luz del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la demandante, partirá la Sala de indicar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció el régimen de transición para que personas que estuvieran próximas a cumplir los requisitos o a adquirir el derecho a la pensión de vejez, y que por esa vía pudieran conservar las condiciones de un régimen anterior por haber estado afiliadas a este cuando entró en vigencia el nuevo Sistema General de Pensiones, por lo que se dispuso

que el tiempo de servicios, el número de semanas cotizadas, la edad y el monto de la pensión sería el que estaba establecido en el régimen anterior, esto, para aquellos que acreditaran tener más de 15 años de servicios cotizados o una edad de 35 años si es mujer o 40 años si es hombre, requisitos que deberían estar cumplidos a la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993, es decir, al 1° de abril de 1994.

De forma tal que, el régimen anterior aplicable a la demandante es el establecido en el Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de dicho año, el cual consagra que, para cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de vejez a través de la citada normativa, la demandante debe contar con al menos 55 años de edad, y tener 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.

El artículo 20 del Decreto 758 de 1990 contempla el monto o tasa de reemplazo como una variable que resulta ser proporcional al número de semanas efectivamente cotizadas. Para aquellas personas que reunieren más de 1,250 semanas, dicho estatuto estableció la máxima tasa de reemplazo, que es del 90% del Ingreso Base de Liquidación.

A su vez, el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, en su párrafo transitorio 4° consagró:

*"El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".*

El recuento anterior, es una necesaria introducción en el análisis de los requisitos para que una persona sea beneficiaria del régimen de transición. Si bien el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, determina la disyuntiva de edad o tiempo de servicios, al establecer que se requiere acreditar 35 o más años al 1° de abril de 1994 en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad para el caso

de los hombres, o demostrar 15 años de servicios o cotizaciones para este mismo momento, siendo éstas las exigencias iniciales para beneficiarse del amparo transicional, lo cierto es que con la introducción del Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, se limitó la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hasta el 31 de julio de 2010, fecha para la cual **perdió toda vigencia**, salvo para aquellas personas que al 29 de julio de 2005, fecha en que entró en vigencia tal acto, hubiesen cotizado al menos 750 semanas o tuvieran un tiempo de servicios equivalente, extendiéndose el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2014.

Por lo tanto, se entrará a dilucidar si la actora cumple con los requisitos para acceder a la prestación deprecada en los términos antes descritos.

## **EL CASO CONCRETO**

En el presente evento y conforme a la prueba documental allegada por ambas partes, se encuentra demostrado en el plenario que la señora CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES nació el 5 de abril de 1960 (fl. 14 del PDF 1 del expediente digital), por lo que al momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, es decir, al 01 de abril de 1994 estaba a pocos días de cumplir la edad de 34 años. Sin embargo, pese a que no contaba con la edad mínima de 35 años y en atención a que el régimen de transición pensional también es un beneficio al cual se puede acceder por tiempo de servicio<sup>1</sup>, la señora ARROYAVE MORALES tenía ese derecho, al contar con más de 750 semanas a la entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993 (historia laboral visible a folios 15 y siguientes del PDF 1 del expediente digital). Dicha densidad, de contera, también le permite a la actora cumplir con la exigencia de las mínimas 750 semanas exigidas por el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, al 29 de julio de 2005, condición de la que resulta aplicable a la asegurada el régimen de transición privilegiando la norma pensional que regulaba su situación, esto es el Decreto 758 de 1990, siempre que la asegurada cumpliera ambos requisitos pensionales, antes de que feneciere el régimen de transición pensional el 31 de diciembre de 2014.

---

<sup>1</sup> Sentencia SU-023 de 2018 (Corte Constitucional).



En cuanto a la densidad de cotizaciones necesaria, no existe ninguna duda que la asegurada cumplió con esa condición de alcanzar a reunir el requisito antes de la finalización del año 2014, como quiera que, según la referida historia laboral, alcanzó a reunir al 31 de agosto de 2011 un total de 1,511 semanas cotizadas, presentando la novedad de retiro en ese ciclo final de cotización.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el requisito de la edad, al haber nacido el 5 de abril de 1960, cumplió la edad de 55 años establecida en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, el día 5 de abril de 2015, esto es, por fuera de la vigencia extensiva del régimen de transición pensional.

Ese límite a la vigencia del régimen de transición pensional al 31 de diciembre de 2014 encuentra su fuente jurídica en el Acto Legislativo 01 de 2005, disposición de carácter constitucional que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política.

Es decir, por disposición del constituyente, ese colectivo de ciudadanos que encajaban en esta extensión del beneficio hasta el año 2014, debían consolidar los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas antes del fenecimiento del régimen el 31 de diciembre de 2014.

La reforma constitucional introducida por el Congreso de la República a través del Acto Legislativo 01 de 2005, que estableció la exigencia de las 750 semanas cotizadas a su entrada en vigencia, para que los asegurados conservaren el beneficio de la transición hasta el 2014, fue abordada por la Corte Constitucional en varias oportunidades. En la Sentencia C-740/06, la Corte Constitucional dijo que no le era posible ejercer el control de constitucionalidad de un AL por su contenido material, por lo que se ha declarado inhibida para proferir fallo de mérito por ineptitud sustancial de la demanda al considerar que los ataques contra la disposición constitucional implican un análisis de tipo material y no formal, consideraciones similares a las que vertió en la S C-178/2007; resaltándose además que en SC-228 de 2011, se encontró que el citado acto legislativo ajustado a la Carta Política no evidenciaba vicio o irregularidad que atentara contra los principios constitucionales y los derechos adquiridos.

El Acto Legislativo 01 de 2005 constituye una reforma a la propia carta política, por lo que su fuerza normativa y egida se extiende sobre toda la legislación nacional sobre la seguridad social. Dicho acto legislativo, elevó a rango constitucional la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Sentencia CSJ SL4285-2018), garantizó los derechos adquiridos, y **limitó razonablemente el régimen de transición pensional, el cual no podría entenderse como un derecho ilimitado en el tiempo**, ya que su finalidad fue garantizar los derechos a normas anteriores a la Ley 100 de 1993, a determinado colectivo de ciudadanos colombianos que tenían ya consolidada ampliamente una expectativa legítima frente a las disposiciones que regularían su derecho pensional (Sentencia CSJ SL5110-2018).

La apoderada judicial de la demandante citó varias sentencias de la Corte Constitucional en su recurso de alzada para reafirmar su postura de que el régimen de transición es un derecho adquirido, conforme lo ha reseñado el alto tribunal.

Citó las sentencias C-789 de 2002, C-754 de 2004, T-534 de 2001, T-235 de 2002, T-169 de 2003 y T-818 de 2007. En dichas providencias, si bien la Corte Constitucional hizo referencia a los derechos adquiridos en el marco del régimen de transición pensional, también refirió que *“el legislador no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado”* subrayando que, *“por encima de cualquier protección a estos intereses, prevalece su potestad configurativa, la cual le permite al legislador darle prioridad a otros intereses que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho”*.

De esta manera, independiente de que el régimen de transición se pueda entender como un derecho adquirido, no se trata de un derecho adquirido *per se*, sino en función de la vigencia de una disposición legal para la adquisición concreta de un derecho cual es el de la pensión. La apoderada judicial de la demandante le reprocha a la A quo que no haya diferenciado entre el derecho adquirido al régimen de transición pensional y el derecho adquirido a la pensión de vejez y, ese raciocinio no se ajusta a derecho y es contrario a entender que el

régimen de transición pensional por sí mismo no otorga ningún derecho, sino en función de una norma específica sobre la cual el asegurado creó su expectativa.-

Finalmente será siempre la disposición sustancial de la seguridad social la que contenga los requisitos o presupuestos que deban cumplirse para que la persona pueda configurar su derecho, y no directamente el artículo 36 de la ley 100 de 1993 como reguladora del régimen de transición pensional.

Ahora, en el sub judice no se niega que la demandante fue beneficiaria del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si bien no por edad, sí por tiempo de servicio al tener más de 750 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, sin embargo, al haber nacido en el año 1960, no alcanzó a cumplir la edad de 55 años antes del 31 de diciembre de 2014, sino que vino a cumplir la edad en abril de 2015, esto es, ya por fuera de la vigencia del régimen de transición pensional. En este escenario, es innegable que, por más que se quiera reforzar la idea de que el régimen de transición pensional es un derecho adquirido, al no acreditarse la totalidad de requisitos en su vigencia, no puede hablarse de que la persona haya concretado el derecho para la aplicación del Decreto 758 de 1990.

La apoderada judicial de la demandante argumenta que, por virtud del principio general del derecho de que nadie está obligado a lo imposible, a la señora CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES no se le podía exigir que cumpliera la edad de 55 años antes del 31 de diciembre de 2014, y ello es cierto, ya que cronológicamente cumplió dicha edad el 5 de abril de 2015; sin embargo, esa sola circunstancia no resulta ser una causa que permita excepcionar la vigencia del régimen de transición pensional, como quiera que para el momento en que la actora configura la edad ya era otra la norma que regulaba su situación (Ley 797 de 2003), fuente legal de su pensión de vejez, tal y cual lo reconoció COLPENSIONES en el acto administrativo de reconocimiento.

De otro lado, la invocación que hace la apoderada judicial de la demandante sobre otro principio del derecho: *“allí donde existe la misma razón, debe existir la misma justificación”*, refiriendo que, si incluso personas que fueron al RAIS recuperaron el derecho del régimen de transición pensional, nótese como

esa hipótesis se encuentra determinada por otros supuestos, cual es el hecho de contar con más de 750 semanas al 1º de abril de 1994, lo que permitía la conservación de ese derecho, sin importar que la persona se hubiere trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero, no obstante, en ningún caso, por más que se recuperare el beneficio de la transición bajo esos supuestos, resultaba posible que a alguien que cumpliera la edad más allá del 31 de diciembre de 2014, se le aplique ese beneficio.

Por lo demás, los argumentos de la recurrente en cuanto a su inconformismo con lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005 y la supuesta desprotección en que dejó a varios ciudadanos, especialmente a los que fueron beneficiarios del régimen de transición pensional pero cumplieron la edad mínima pensional después del 31 de diciembre de 2014, es un tema del cual queda relevada esta sala de ahondar, ya que es innegable que, por virtud de la supremacía constitucional (artículo 4º de la Constitución Política), debe aplicarse la carta sin miramientos a consideraciones particulares de desprotección; ello en el marco de entender que los regímenes de transición que crea el legislador no mantienen indeterminadamente en el tiempo las condiciones pensionales más favorables.

Conforme a las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia será **confirmada íntegramente**.

Costas Procesales.

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo de la señora CRUZ ANGELA ARROYABVE MORALES y en favor de COLPENSIONES, se fijan agencias en derecho en medio salario mínimo vigente para el 2022.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas que se conoce en Apelación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Costas en esta instancia a cargo de la señora CRUZ ANGELA ARROYAVE MORALES y en favor de COLPENSIONES; se fijan agencias en derecho en el equivalente a medio salario mínimo para el año 2022.

**TERCERO:** En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**CUARTO: SE ORDENA** la notificación por EDICTO de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada